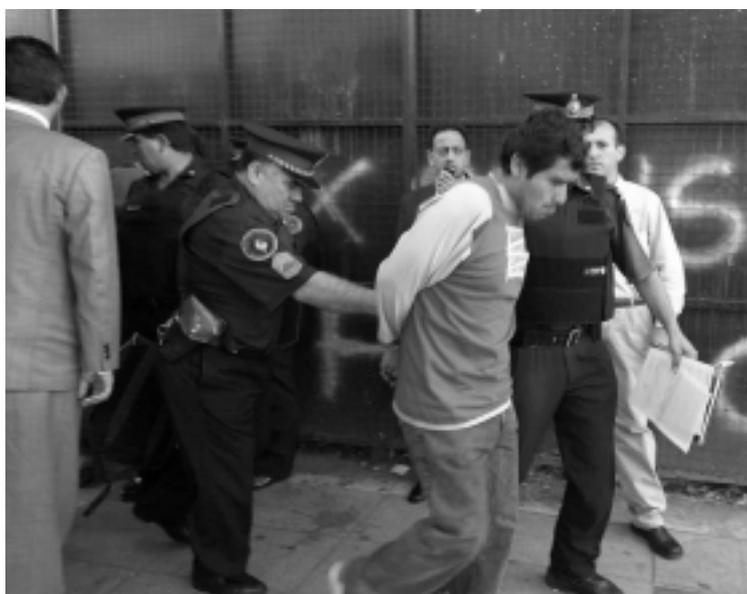


Ricardo **Ragendorfer****Inseguridad y violencia urbana en Argentina**

Por quién doblan las alarmas

**Ricardo Ragendorfer**

Cronista policial. Trabajó en *Cerdos y Peces*, *Noticias*, *Tres Puntos*, *Gente*, *Et-cétera*. Publicó *Robo y Falsificación de Obras de Arte en Argentina*, *La Bonaerense*, *La secta del Gatillo*, *A pura sangre*. Participó de los programas de televisión *El Otro Lado*, *Unidos y Dominados* y en *Historias del crimen* por TELEFÉ, entre otros.

En un país en el que el desempleo –según el índice record de 1996– llegó a afectar al 19 por ciento de la población económicamente activa, se produjo un aumento inequívocamente geométrico en los delitos contra la propiedad y las personas.

En tal contexto irrumpieron nuevas generaciones delictivas cada vez más jóvenes, precarizadas y violentas, en el sentido literal de la palabra. Porque no son los trabajadores quienes, al ser cesanteados, deciden súbitamente volcarse hacia a la práctica de actividades ilícitas, sino los hijos y

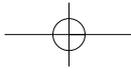
hasta los nietos de familias cuyos integrantes adultos vienen careciendo de actividades genuinas desde hace ya, por lo menos, diez años.

Dicho de otro modo, fueron camadas enteras las que pasaron de una lactancia incierta a una adolescencia no menos dudosa, sin mantener siquiera un roce conceptual con las fuerzas productivas. Y son ellos quienes cambiaron de un modo cualitativo el mapa del delito, hasta entonces habitado de manera preferencial por malhechores más calificados. La elección de las vícti-

A
N
C
I
L
A
J
E
S

63

Trampas



Ricardo Ragendorfer

Inseguridad y violencia urbana en Argentina. Por quién doblan las alarmas.

mas empezó a convertirse en un ejercicio peligroso, indiscriminado y, muchas veces, gratuitamente sangriento.

Su correlato mediático no es menos estremecedor: intermitentemente se vomita violencia urbana desde los diarios y la televisión. Sus páginas y pantallas son las que realmente moldean aquel engendro bautizado como “sensación térmica de la inseguridad”, que es algo así como el “riesgo país” pero en términos policiales; es decir, una especie de termómetro cifrado en la arbitrariedad. Porque no se trata de una construcción estadística sino de un caprichoso sentir alimentado por una amplificación de situaciones subjetivas.

No es que el mal no exista ni que las empresas periodísticas se empecinen en manipular a la opinión pública para favorecer o socavar determinadas políticas de seguridad. Salvo unas pocas excepciones, el principal interés del grueso de los medios argentinos no es otro que el de incrementar sus ventas. Y si para ello tienen que saturar el firmamento con

noticias policiales, no dudarán en hacerlo y de la manera más sinuosa.

Ante un cuadro tan intenso, la clase política no se ha mostrado indiferente; por el contrario, funcionarios, legisladores y candidatos de toda laya enarbolan la lucha contra el delito como su bandera más preciada. Y lo hacen porque en el fondo perciben un fenómeno curioso: la penalización de la miseria responde a un clamor multisectorial; los reclamos de “mano dura” –cuya respuesta oficial más nítida es el aumento de las poblaciones carcelarias– provienen indistintamente de clases privilegiadas y pobres. Es en el temor a la violencia urbana donde los extremos socioeconómicos se tocan. Y por una simple razón: todos quieren protegerse.

No sólo está en juego el pánico a la vulnerabilidad experimentado por ricos y famosos, funcionarios y ex funcionarios enriquecidos y de los empresarios más poderosos del país; también cuenta la proverbial sensibilidad propietaria de la masa votante de clase media y clase media baja. Sin de-

jar de lado el síndrome de indefensión padecido por las capas más empobrecidas.

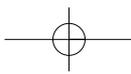
Para estos últimos, la inestabilidad extrema es un dato permanente y cotidiano; por lo general, no saben como subsistir hasta el día siguiente, y ser víctima de un delito se agrega de manera dramática a esa situación. Debido a ello, seguramente, expresan un pedido de orden ciego e inmediato. Es una paradoja que los sectores más desamparados sean también los más propensos a pedir políticas autoritarias, aunque éstas les sean esencialmente nefastas. Como ya no le pueden reclamar seguridad social al Estado terminan pidiendo seguridad a secas.

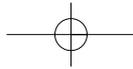
Ningún político que se precie desconoce la importancia que tiene el tema, tanto en una campaña electoral como en una gestión de gobierno. Y en tiempos de transformación y ajuste, la policía deja de ser únicamente un resorte para gobernar, para convertirse en un arma estratégica. Pero de doble filo.

Los perros de la calle

En materia de organizaciones mafiosas, Argentina es el epicentro de un fenómeno absolutamente original. En los países donde impera una gran tradición al respecto, las corporaciones del crimen organizado suelen tener el denominador común de su autarquía, es decir, mantienen cierto grado de enfrentamiento con los aparatos del Estado. Lo cual no significa, por ejemplo, que en Italia, Rusia o México no

Es una paradoja que los sectores más desamparados sean también los más propensos a pedir políticas autoritarias, aunque éstas les sean esencialmente nefastas. Como ya no le pueden reclamar seguridad social al Estado terminan pidiendo seguridad a secas.





haya efectivos policiales corruptos. Pero cuando eso sucede, es porque los compró la mafia. En Argentina, sin embargo, es exactamente al revés: la policía compra delincuentes.

Del conjunto de las policías locales, la Bonaerense es, sin duda, el icono más emblemático de la corrupción. Y eso tiene que ver con dos factores: por un lado, sus 47 mil efectivos la convierten en la fuerza de seguridad más numerosa del país y, por otro, la jurisdicción que ocupa se extiende sobre el territorio más vasto y complejo de la Argentina.

No obstante, el estigma de la corrupción es compartido en menor o mayor medida por todas las fuerzas nacionales de seguridad; tanto las tres agencias que dependen del poder central –Gendarmería, Prefectura y Policía Federal– como así también las policías provinciales. Tal vez, la única diferencia entre ellas sea su naturaleza territorial. Las más activas en los quehaceres ilícitos suelen ser las que actúan en las grandes urbes, precisamente por tener una mayor densidad de habitantes y, a la vez, haber sido devastadas por la desindustrialización. Pero no le van a la zaga las instituciones policiales de las provincias más atrasadas, cuyas estructuras de gobierno casi feudales les otorgan atribuciones que parecen directamente salidas de una ficción.

Históricamente, todas ellas hicieron de algunas contravenciones parte de su sistema de supervivencia: capitalistas del juego, proxenetas y comerciantes irregulares trabajan desde siempre en sociedad forzada con las comisarías, pagando un canon para seguir existiendo.

En los últimos años, sin embargo, a este estilo de trabajo se agrega-

ron otros pactos con hacedores de una gran cantidad de delitos contemplados por el Código Penal. Mediante “arreglos”, extorsiones, impuestos, peajes y tarifas o, lisa y llanamente, a través de la complicidad directa, los uniformados participan en un diversificado mercado de asuntos, siendo los más lucrativos el tráfico de drogas, los desarmaderos, la piratería del asfalto, la concesión de “zonas liberadas” para cometer asaltos y los secuestros extorsivos.

El punto de inflexión entre ambas etapas fue, sin duda, la última dictadura militar donde los policías incorporaron a sus cajas los dividendos obtenidos a través de un sinfín de delitos graves y, en algunos casos, hasta aberrantes, como, por caso, los secuestros. Finalmente fue en la década del 90 cuando estas actividades adquirieron un sesgo alevosamente orgánico.

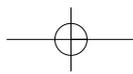
Este cuadro de situación provoca, entre otras calamidades, que los índices de la inseguridad pública sean directamente proporcionales al nivel de corrupción existente en las filas policiales.

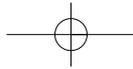
En paralelo, otra variante de inseguridad, pero de distinto signo, es la que se palpita por obra y gracia de ese afán policial, casi siempre desmesurado, de querer imponer su presencia en las calles; es decir, los fusilamientos sumarios, también conocidos como casos de “gatillo fácil”. Al respecto, en el catálogo de los ilícitos que habitualmente realizan las fuerzas de seguridad, éste tal vez sea el más recurrente. Y, de hecho, es también el único delito sin fines de lucro que suelen cometer los uniformados.

La piedra angular de su naturaleza gira en torno a la criminalización de quienes no son crimina-

les. Por eso mismo, el *target* de sus víctimas suele ser preciso: adolescentes que comparten una cerveza en cualquier esquina del Gran Buenos Aires, que les gusta la cumbia o el rock, que van a recitales y que pueden llagar a fumar un porro. Pero no son delincuentes; son muchachos de clase media baja, tal vez desertores del colegio secundario y con dificultades para conseguir empleo. Y como no tienen grandes obligaciones, pasan las horas con sus amigos. Esa gente, de manera preferencial, es tomada como blanco por la policía, quizás en nombre de un ejercicio algo heterodoxo de la “prevención del delito”. Lo cierto es que, desde 1984 a la fecha –que es el tiempo transcurrido desde el fin de la última dictadura militar–, se produjeron en todo el país alrededor de 1800 casos de esta modalidad. Con la delincuencia organizada, en cambio, la policía dirime sus cuestiones de un modo más hermético, subterráneo y con códigos secretos. Pueden incluso llegar a matar –y lo hacen con frecuencia–, pero sólo cuando hay en danza un vuelto, un incumplimiento o una traición.

La delincuencia lúmpen, por su parte, está excluida de los beneficios de esa convivencia. Este segmento, pese a la escasez de sus recursos y a la poca envergadura de sus hechos, es el que diariamente alimenta portadas periodísticas y morgues. Y el que digita la “sensación térmica de la inseguridad”. Como ya se ha visto, los llamados “pibes chorros” son un fenómeno propio de la última década, creciente en lo cuantitativo y poblado por existencias cronológicas que en la mayoría de los casos les falta tiempo para llegar a la adolescencia y





Ricardo Ragendorfer

Inseguridad y violencia urbana en Argentina. Por quién doblan las alarmas.

que, habitualmente, mueren como ratas antes de alcanzarla. Y, muchas veces, en manos de escuadrones compuestos por uniformados, quienes de ese modo articulan una suerte de limpieza social. Los pistoleros más experimentados suelen evitarlos. Y a los policías tampoco le son de gran utilidad: no hay demasiado beneficio en cerrar pactos comerciales con quienes pueden llegar a traer, en el mejor de los casos, un botín de unos pocos pesos y, encima, luego de haber liquidado a la víctima. En cambio, esta franja delictiva les resulta útil a las fuerzas de seguridad para engordar estadísticas, reclamar nuevas atribuciones y agitar leyes penales más severas.

Observado desde un ángulo inverso, sujetar una variada gama de modalidades delictivas bajo las riendas de la recaudación policial no deja de ser un modo eficaz de ejercer control sobre la inseguridad urbana. Y de tener cintura como para regularla. Los hombres de azul saben que ante el resto del mundo poseen ese mágico y unívoco poder. Y parte del milagro es que lo posean con

efectivos mal equipados, mal pagados, mal reclutados y peor instruidos.

Todos los poderes del Estado conocen desde siempre esta situación y la consienten, por aquello de la crónica escasez de recursos y de la no menos crónica corrupción de la clase política, que siempre supo sacar provecho. Porque, el enorme volumen monetario que se desliza a través de las cajas policiales no sólo va a parar a las alcancías de los uniformados; por el contrario, también sirve para financiar a la clase política y a sus aparatos partidarios. Y esto, en los últimos años, se ha convertido en algo inocultable.

El lugar de subordinación que ocupan las instituciones policiales dentro de los poderes del Estado torna imposible creer en su autonomía delictiva. Caciques barriales, intendentes, legisladores y hasta gobernadores, son sus mandantes o padrinos, según sus cargos y capacidad de acción. Fondos para bolsillos particulares y campañas electorales, complicidad en los propios negocios turbios y mano de obra disponible, son algunas razones de peso.

Con el Poder Judicial sucede otro tanto. Por empezar, desde el punto de vista meramente operativo, sus integrantes dependen de la policía hasta para el traslado de detenidos. Pero esa es sólo una fatalidad inicial, ya que la injerencia de las fuerzas de seguridad sobre la Justicia se extiende muchas veces a través de pliegues absolutamente surrealistas. Lo cierto es que la vinculación de algunos magistrados y fiscales con uniformados y personajes de la dirigencia política los convierte en el cateto menor de un triángulo, a todas luces, picante.

Como ya se ha visto, la corporación policial goza del preciado atributo de codearse, por un lado, con altos dignatarios del universo político y, por otro, con la elite de los bajos fondos. Precisamente, ese carácter bidireccional hace que los uniformados arrastren sobre sus hombros la delicada tarea de ser el único vaso comunicante entre dos estigmas aparentemente inevitables y estancos: la inseguridad que brota del delito callejero y la corrupción en las altas esferas del poder.

A
M
C
L
A
J
E
S

66

Tram[pl]as

